



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

RC.-6/2019.

109

En la Ciudad de México, a cinco de marzo de dos mil veinte, **se da cuenta** a la Presidente del Tribunal, con el oficio número **MI/PL/SSGA/XIX/4432/2020**, del Presidente de la **Suprema Corte de Justicia de la Nación** (recibido mediante notificación electrónica el cuatro de marzo del año en curso, a las 09:56 horas, a través de la aplicación del Módulo de Intercomunicación entre los órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación), registrado con el número 1508.- Conste.

Ciudad de México, a cinco de marzo de dos mil veinte.

Agréguese al toca **RC.-6/2019**, el oficio número **MI/PL/SSGA/XIX/4432/2020**, del Presidente de la **Suprema Corte de Justicia de la Nación** (recibido mediante notificación electrónica el cuatro de marzo del año en curso, a las 09:56 horas, a través de la aplicación del Módulo de Intercomunicación entre los órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación), mediante el cual solicita se le envíe el archivo digital de la resolución emitida en el presente asunto a los correos electrónicos que indica, a fin de resolver la posible denuncia de contradicción de tesis 46/2020, suscitada entre criterios de diversos órganos jurisdiccionales entre los que se encuentra este Tribunal Colegiado; y pide se le indique si el criterio sustentado en el presente asunto se encuentra vigente, o en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; al respecto, como lo solicita remítasele el archivo digital de la resolución emitida en el presente asunto; asimismo se le hace del conocimiento que este Órgano Jurisdiccional no se ha apartado del criterio sostenido al resolver el presente asunto.

Notifíquese, como esta ordenado.



Así, lo acordó, y firma la Magistrada **LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ**, Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ante el Secretario de Acuerdos **Sergio Molina Castellanos**, quien autoriza y da fe.- Conste,

maor

LuZ Delfina Abitia G.
Sergio Molina Castellanos

En 06 MAR 2020

[Signature] se notifica

que antecede por medio de este en términos de los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, salvo las que se hayan ordenado realizar en forma personal.- Conste.-

LA ACTUARIA DEL
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO

10 MAR 2020

LIC. GABRIELA ESTRADA HERNÁNDEZ

En 10 MAR 2020 refiere la razón que antecede conforme a la fracción II del artículo 29 de la Ley de Amparo reforma.- Doy fe.-

LA ACTUARIA DEL
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL PRIMER CIRCUITO

LIC. GABRIELA ESTRADA HERNÁNDEZ

Ciudad de México, a **quince de febrero de dos mil diecinueve**, se listó el presente asunto para ser visto en la sesión que se celebrará el **veintidós del mismo mes y año**, y siguientes. Conste.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS:

LIC. SERGIO MOLINA CASTELLANOS.

En la sesión celebrada el **veintidós de febrero de dos mil diecinueve**, se aprobó por **UNANIMIDAD** de votos, el proyecto formulado por el Magistrado ponente en el sentido de **CONFIRMAR LA SENTENCIA RECURRIDA.-** Ciudad de México, a **veintidós de febrero de dos mil diecinueve**. Conste.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS:


LIC. SERGIO MOLINA CASTELLANOS.

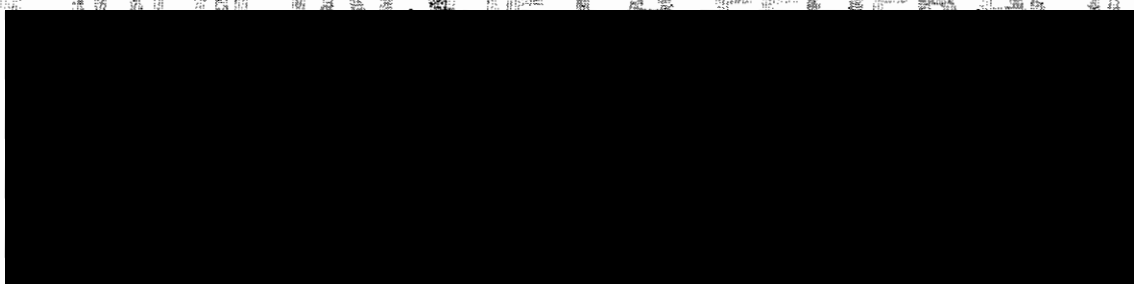



000065

R.C.-6/2019.**RECURRENTE Y QUEJOSA:****MAGISTRADO PONENTE:**
ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO.**SECRETARIA:**
NELIDA CALVILLO MANCILLA.

Ciudad de México, a veintidós de febrero de
dos mil diecinueve.

V I S T O, para resolver, el recurso de
revisión **R.C.-6/2019** interpuesto por 



su apoderada  contra la sentencia

de fecha **quince de noviembre de dos mil dieciocho**, dictada por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 1122/2018 promovido por la propia recurrente, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] contra actos del Juez Cuarto Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como autoridad ordenadora y ejecutora, y

R E S U L T A N D O.

PRIMERO. Mediante escrito presentado el **dieciséis de octubre de dos mil dieciocho**, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] por conducto de



000066

R.C.-6/2019.

3

su apoderada [REDACTED] solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la autoridad ya mencionada que precisó como sigue:

"EL ACTO RECLAMADO.

"Del C. Juez Cuarto de lo Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se reclama la Sentencia Interlocutoria dictada en fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho en el expediente 1777/2018, en el que se resuelve el Recurso de Revocación interpuesto por mi representada, declarándolo como infundado y confirmando el auto de fecha seis de septiembre de dos mil dieciocho, por medio del cual la autoridad responsable inadmite la solicitud de providencias precautorias de retención de bienes que se le planteó por considerar que no se reunían los requisitos establecidos por el artículo 1168 del Código de Comercio, así como considerar que para decretar la retención de bienes se debía especificar la (sic) cuentas bancarias a retener."

SEGUNDO. Los antecedentes del acto reclamado se relataron como se transcribe enseguida:

"a. En fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se presentó escrito inicial de providencias precautorias de retención de bienes a nombre de [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] en contra de [REDACTED]

[REDACTED] radicado ante el Juzgado Cuarto de lo Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, bajo el número de expediente judicial 1777/2018.

"b. En fecha seis de septiembre de dos mil dieciocho, el C. Juez Cuarto de lo Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, emite acuerdo admitiendo las providencias precautorias, sin embargo en el mismo decide de manera ilegal y contraria a derecho fijar de manera discrecional a mi representada, una garantía por la cantidad de \$9,206.93 (NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 93/100 M.N.) por concepto de daños y la cantidad de \$15,503.50 (QUINCE MIL QUINIENTOS TRES PESOS 50/100 M.N.) por concepto de perjuicios que se le pudiese ocasionar a la futura demandada, con motivo del otorgamiento de la providencia precautoria consistente en la retención de



bienes propiedad de [REDACTED]

"c. Posteriormente la suscrita interpuso recurso de revocación en contra del auto decretado en fecha seis de septiembre de dos mil dieciocho, se admiten las providencias precautorias pero se señala fianza.

"d. Finalmente el C. Juez Cuarto de lo Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dicta la Sentencia Interlocutoria de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, calificando de insuficientes e infundados los agravios en el recurso de revocación planteado, confirmando en consecuencia su determinación de fijar fianza a mi representada, resolución que constituye el acto reclamado."

TERCERO.- Como conceptos de violación, se expresaron los siguientes:

"ÚNICO CONCEPTO DE VIOLACIÓN.- La resolución de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el C. Juez Cuarto de lo Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, es violatoria de derechos humanos y de las garantías constitucionales, toda vez que fue resuelta en contravención al principio de

legalidad, seguridad jurídica, estricto derecho, **fundamentación, motivación, tutela cautelar efectiva** y acceso a la justicia, protegidas por nuestra Carta Magna, así como por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, violándose en perjuicio de mi representada los artículos 14, 16, 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 8, 9, 25 y **63 fracción I** de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 2 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 3, Fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y el artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles y **86 de la Ley de Instituciones de Crédito** vigente.

"La autoridad responsable considera de manera contraria a derecho que los agravios expuestos en el recurso de revocación son infundados e improcedentes y que mi representada no se encuentra exenta de exhibir fianza para garantizar los posibles daños y perjuicios que se le pudieran



R.C.-6/2019.

7

ocasionar a la futura demandada con la tramitación de los presentes. En ese sentido, contraviene disposiciones expresas en las cuales de forma clara se señala que mi representada al ser una institución de crédito, forma parte de la Administración Pública Federal, por lo cual se encuentra exenta de exentas (sic) de presentar garantías en los juicios en los que forme parte, sobre todo lo establecido en la Ley de instituciones de Crédito, en la cual se da una presunción legal a favor de las instituciones de crédito sobre el que no están obligadas a presentar garantía en los juicios en que participen.

"En efecto, el acto reclamado carece de debida FUNDAMENTACIÓN y MOTIVACIÓN, los cuales son derechos que tiene tutelados mi representada ya que todo acto reclamado que sea carente de dichos principios, dejará inminentemente, en estado de indefensión al gobernado.

"Se explica, el contexto normativo de las providencias precautorias solicitadas, prevé en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, los artículos 1054 y 1,324 Código de Comercio, artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles y artículo 3 de la Ley

Orgánica de la Administración Pública Federal,
los cuales a la letra dicen:

"Artículo 86.- Mientras los integrantes del Sistema Bancario Mexicano, no se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligados a constituir depósitos o fianzas legales, ni aun tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos."

Código de Comercio:

"Art. 1,054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva."

"Art. 1,324. Toda sentencia debe ser fundada en ley, y si ni por el sentido natural, ni por el espíritu de ésta, se puede decidir la controversia, se atenderá a los principios



R.C.-6/2019.

9

generales de derecho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso."

Código Federal de Procedimientos Civiles:

"ARTÍCULO 4° Las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este Código exija de las partes."

"Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

"Artículo 30 - El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal:

I.- Organismos descentralizados;

II.- Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y"

"De una interpretación armónica de los preceptos antes transcritos se concluye que se consideran a los integrantes del Sistema Bancario Mexicano parte de la administración pública federal. Y como de acreditada solvencia y estos, y no están obligados a constituir depósitos o fianzas legales en los juicios en que sean parte, esto por disposición expresa, por lo que la resolución materia del presente contraviene lo establecido por el legislador, y donde el legislador no distinguió, la autoridad no debe hacerlo, ello, por encontrarse contemplado de esta forma en la Ley de Instituciones de Crédito, y aplicable al caso en particular, máxime que se encuentra también establecido en la legislación adjetiva federal de aplicación supletoria al Código de Comercio.

"Lo anterior es así, ya que los juicios mercantiles las resoluciones se deben fundar y dictar con apego a la Ley, y si bien lo relativo a las providencias precautorias se rigen de acuerdo al Código de Comercio, también lo es que le son aplicables en lo particular a lo relativo a la fianza las leyes especiales en materia tanto de la organización de la Administración Pública Federal, de la cual forman parte las instituciones de crédito, cuya



R.C.-6/2019.

11

actuación se encuentra regulada en la Ley de Instituciones de Crédito, que adminiculados dichos ordenamientos a la legislación adjetiva federal, en donde existe disposición expresa de que mi representada como integrante de la Administración Pública Federal se encuentra exenta de exhibir fianza en los juicios en que forme parte además de que existe presunción legal a su favor de considerarla de acreditada solvencia, aun y cuando se trata de una ley especial, igualmente aplicable a las providencias precautorias, máxime que el capítulo que contempla las providencias precautorias, en específico el artículo 1176 del Código de Comercio, estipula expresamente que en las medidas cautelares se observarán lo relativo a los juicios ejecutivos mercantiles, estableciendo lo siguiente:

"...Artículo 1176. La retención de bienes decretada como providencia precautoria se regirá, en lo que le resulte aplicable, por lo dispuesto para los juicios ejecutivos mercantiles..."

"Para mayor precisión, resulta conveniente citar el precepto jurídico contenido en el Código de Comercio, el cual no se tomó en consideración al momento de tomar tal

determinación y el cual es perfectamente aplicable al caso concreto.

"Artículo 1063.- *Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme este Código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por el Código Federal de Procedimientos Civiles y en último término por el Código de Procedimientos Civiles local."*

"En consecuencia, al ser una Institución de Crédito y al formar parte del Sistema Bancario Mexicano, resulta válidamente aplicable lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, al ser una ley especial en materia de comercio, considerando por otra parte que su Señoría invoca una tesis de jurisprudencia, lo cierto es que la misma no tiene la obligatoriedad en virtud de que no es una jurisprudencia.

Época: Quinta Época, Registro: 361252,
Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada,
Fuente: Semanario Judicial de la Federación,
Tomo XL, Materia(s): Civil, Tesis: Página: 922.

"INSTITUCIONES DE CREDITO, ESTAN EXENTAS DE LA OBLIGACION DE OTORGAR FIANZA EN EL AMPARO.- *Siempre que concurren en los juicios de amparo, las condiciones exigidas en el artículo 55, fracción*



R.C.-6/2019.

13

I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 104 Constitucionales, deben concederse la suspensión para el efecto de que no surta ninguno la resolución reclamada, mientras se resuelve el correspondiente juicio de garantías, sin que sea necesario tratándose de instituciones de crédito, como son los bancos, que otorgue fianza por éstos, para que el citado beneficio produzca sus efectos, porque el artículo 26 de la Ley de Instituciones de Crédito, expresamente exime a los bancos de la obligación de caucionar, atendiendo a que oficial y necesariamente, son solventes, por vigilar el Estado su manejo por conducto de la Comisión Bancaria, porque el concepto fianza, en la suspensión, debe entenderse en la acepción ordinaria de la palabra garantía, pues su finalidad no es otra que la de asegurar el interés de las partes que contiendan ante los tribunales constitucionales, y no hay razón alguna que autorice para atribuirle el sentido relativo que expresa el Código Civil, sin que ello obste para que sea debidamente cumplimentada la prevención contenida en el artículo 27 de la mencionada Ley de Instituciones de Crédito, consistente en que sea registrado en la contabilidad del banco

respectivo, el otorgamiento de la fianza." (cita precedente)

"En ese orden de ideas, es menester resaltar que la decisión de la autoridad responsable es carente de sentido y de legalidad, al contravenir disposición expresa sobre el que las instituciones de crédito al ser parte de la Administración Pública Federal, se encuentran exentas de exhibir fianza, además de que tiene a su favor la presunción legal de que cuentan con acreditada solvencia para hacer frente al pago de las cantidades a que lleguen a ser condenadas, en este caso, para el pago de los daños y perjuicios que lleguen a ocasionar a la futura demandada, por lo tanto es procedente que se conceda el Amparo y Justicia de la Unión y se ordene a la autoridad responsable a revocar su determinación sobre el que mi representada exhiba fianza, y se modifique el auto de seis de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se admitieron las providencias precautorias de retención de bienes sin fijar e imponer garantía alguna a mi representada, tomando en consideración los preceptos legales invocados."

CUARTO.- Seguido el procedimiento, el Juez

Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de



R.C.-6/2019.

15

México, dictó sentencia con fecha **quince de noviembre de dos mil dieciocho**, en la cual determinó:

"ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a

[REDACTED]

[REDACTED] contra un acto del Juez Cuarto Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los razonamientos expuestos en el considerando último.

"NOTIFÍQUESE.

"Lo sentencia y firma **Eduardo Hernández Sánchez** Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de **Paola María Olivia Juárez Martínez**, Secretaria que autoriza y da fe, el día en que tiene verificativo la audiencia constitucional. **Doy fe.**"

QUINTO. Inconforme con la anterior

determinación, la quejosa [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], por conducto de su apoderada [REDACTED] mediante escrito presentado ante el Juzgado de Distrito respectivo, interpuso recurso de revisión, el que se admitió en este Tribunal Colegiado por acuerdo de su presidente de **cuatro de enero de dos mil diecinueve**; se ordenó dar la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento. De autos se advierte que pasado el término legal previsto en el artículo 82 de la ley de la materia, **no se formuló revisión adhesiva**, finalmente, por diverso proveído de **treinta de enero de dos mil diecinueve**, se turnaron los autos al magistrado relator para la elaboración del proyecto respectivo y,

C O N S I D E R A N D O:

I. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso b), último párrafo, de la Constitución General



de la República; 81, fracción I inciso e) y 84 ambos de la Ley de Amparo; 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el contenido del Acuerdo 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, que dejó sin efectos el diverso Acuerdo General 17/2012, de dieciséis de mayo de dos mil doce, por recurrirse una resolución pronunciada por un Juez de Distrito en Materia Civil residente en este circuito.

II. El recurso de revisión se hizo valer por parte legítima y en tiempo. En efecto, la sentencia impugnada se notificó **por lista** a la quejosa el **dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho**, comunicado judicial que surtió efectos el día hábil siguiente, esto es, **el día veintiuno** de ese mes y año, por tanto, el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del **veintidós de noviembre al seis de diciembre de dos mil dieciocho**, debiendo excluirse de dicho término los días **veinticuatro, veinticinco y**

treinta de noviembre, uno y dos de diciembre, todos de dos mil dieciocho, por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Luego, como el recurso se interpuso el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, por conducto de la Oficialía de Partes del Juzgado de Distrito respectivo, su promoción resulta oportuna.

III. La resolución recurrida se fundó en las siguientes consideraciones:

"PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra un acto derivado de un procedimiento de naturaleza



R.C.-6/2019.

19

mercantil, seguido ante un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito territorial de este órgano de control constitucional.

"SEGUNDO. Fijación del acto reclamado.

De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, del análisis de la demanda de garantías, se hace la fijación clara y precisa del acto reclamado, que es la interlocutoria de **veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho**, que declaró infundado el **recurso de revocación** contra el proveído de seis de ese mes y año, emitido en las **providencias precautorias 1777/2018 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Cuantía Menor de esta Ciudad.**

"En dicho auto se admitió la providencia precautoria de retención de dinero, y se fijó una garantía a la institución bancaria quejosa para responder por los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al deudor.

"TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado, lo

que se robustece con las constancias remitidas en su apoyo -las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo-.

"CUARTO. Antecedentes. De las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierten los siguientes antecedentes destacados:

"1. El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, la institución bancaria quejosa solicitó como providencia precautoria, la retención de dinero contra [REDACTED]

"2. El seis de septiembre del año actual, se admitió la providencia precautoria y se fijó como garantía la cantidad de \$9,206.93 (nueve mil doscientos seis pesos 93/100 moneda nacional) por concepto de daños y \$15,503.50 (quince mil quinientos tres pesos 50/100 moneda nacional) por perjuicios.

"3. Inconforme con lo anterior, el banco interpuso revocación, que fue resuelto el veintiuno de septiembre siguiente.



R.C.-6/2019.

21

"Esta resolución constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional.

"QUINTO. Análisis del concepto de violación.

"El banco quejoso sostiene que el acto reclamado está indebidamente fundado y motivado, y con ello se violan en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, pues:

"a) Al ser una institución de banca múltiple, en términos del artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito así como los diversos 1054, 1324, 1063 y 1176 del Código de Comercio, no hay justificación para exigirle la exhibición de una cantidad para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al deudor, respecto del cual se pidió la retención de bienes.

"Cuestiones que debió atender la autoridad responsable, conforme al artículo 4 del Código Civil Federal, y 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

"b) El criterio invocado por la autoridad responsable para robustecer su argumento

de requerir una garantía a la moral quejosa, no es de carácter obligatorio.

"Son **infundados** los conceptos de violación, como se demostrará enseguida.

"El contexto normativo de las providencias precautorias solicitadas, se prevé en los artículos 1168, 1175 y 1177 del Código de Comercio, que dicen:

"Artículo. 1,168. *En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en este Código, y que son las siguientes:*

I. Radicación de persona, cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien deba promoverse o se haya promovido una demanda. Dicha medida únicamente tendrá los efectos previstos en el artículo 1173 de éste Código;

II. Retención de bienes, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan,



R.C.-6/2019.

23

oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes, y

b) Tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene.

En los supuestos a que se refiere esta fracción, si los bienes consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros bienes fungibles, se presumirá, para los efectos de este artículo, el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo.

Tratándose de la retención de bienes cuya titularidad o propiedad sea susceptible de inscripción en algún registro público, el Juez ordenará que se haga la anotación sobre el mismo.

“Artículo. 1,175. El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos:

I. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor;

II. Exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión;

III. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas;

IV. Tratándose de acciones personales, manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles, y



R.C.-6/2019.

25

V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte.

El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante."

"Artículo. 1.177. Las providencias precautorias establecidas por este Código podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos previstos en este ordenamiento. En el segundo caso, la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda separada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio."

"La legislación transcrita es aplicable a la solicitud de una providencia precautoria en un juicio mercantil en que se ejercerá una acción de pago (personal).

"En ese tenor, uno de los requisitos a satisfacer al solicitar una providencia precautoria, consiste en garantizar los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida al deudor, en caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto, o bien porque promovida, sea absuelto.

"En el particular, la parte quejosa pretende que se le exente de cumplimentar ese requisito, por ser una institución bancaria que no se encuentra en situación de quiebra, en términos de los artículos 86 de la Ley de Instituciones de Crédito¹.

"Empero, si bien es cierto que el artículo en cita señala que los integrantes del Sistema Bancario Mexicano no están obligados a constituir fianzas legales, dada su solvencia económica, también lo es que dicho precepto, por estar previsto en un

¹ "Artículo 86. Mientras los integrantes del Sistema Bancario Mexicano, no se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligados a constituir depósitos o fianzas legales, ni aun tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos."



R.C.-6/2019.

27

ordenamiento distinto al Código de Comercio, que no forma parte de la supletoriedad permitida por el legislador, no es susceptible de ser aplicado como excepción a la regla general que establece el artículo 1175, fracción V, de esta última norma.

"Así, es correcta la respuesta que dio la autoridad responsable al agravio planteado en el recurso de revocación, pues el Código de Comercio no distingue un tratamiento especial para las instituciones bancarias sobre el tema de la garantía aludido, y al tener el mismo rango constitucional, las disposiciones de ese ordenamiento no pueden supeditarse al contenido de una ley reglamentaria.

"Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia P./J. 6/92, de la Octava Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1992, página 60, en Materia Administrativa, que dice:

"INSTITUCIONES DE CREDITO. SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A OTORGAR

GARANTIA O CONTRAGARANTIA EN MATERIA DE SUSPENSION, TRATANDOSE DE AMPARO DIRECTO. El artículo 173 de la Ley de Amparo, establece que debe otorgarse fianza para que surta efectos la suspensión concedida o, en su caso, contrafianza para nulificar la medida cautelar y esta exigencia emana de la aplicación de un precepto constitucional como lo es el artículo 107, fracción X, de la Carta Magna; por tanto, es evidente que no obstante que el artículo 6o. de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito exime a las instituciones de crédito de constituir depósito o fianza legales, tales instituciones se encuentran obligadas a otorgar fianza para obtener la suspensión de sentencias definitivas que se reclamen en amparo directo y, en su caso, contragarantía para dejar sin efecto la medida suspensiva, porque partiendo de un principio de hermenéutica jurídica, no puede aceptarse que los preceptos relativos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, queden subordinados a una



R.C.-6/2019.

29

disposición también contenida en otra ley reglamentaria que se encuentra en contradicción con la Ley de Amparo, pues los mandatos de ésta, en relación con los preceptos constitucionales, son los que deben regir la interpretación y aplicación de cualquier otra ley en cuanto al juicio constitucional, para no hacer nugatorias las disposiciones del citado juicio de garantías."

"También se cita, por analogía, la tesis I.9o.A.5 K, de la Novena Época, aprobada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1365, en Materia Común, que dice:

"INSTITUCIONES DE CRÉDITO. TRATÁNDOSE DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE AMPARO, RESULTA INAPLICABLE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY QUE LAS RIGE. El artículo 125 de la Ley de Amparo establece que cuando sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, la

medida cautelar se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaran si no se obtiene sentencia favorable; esta exigencia emana del artículo 107, fracción X, de la Carta Magna y no obstante que el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito exime a éstas de constituir depósito o fianza legales, aun tratándose de la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo, las instituciones de crédito sí se encuentran obligadas a otorgar garantía para que surta efectos la suspensión de tales actos cuando exista riesgo de que con tal medida se pueda causar daño o perjuicio a un tercero, porque conforme al principio de autonomía jurídica no puede aceptarse que los preceptos relativos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, queden subordinados a una disposición también contenida en otra ley reglamentaria, pues los mandatos de aquélla son los que deben tomarse en cuenta para la interpretación y aplicación de cualquier otra ley en cuanto al



R.C.-6/2019.

31

juicio constitucional, para no hacer nugatorias las disposiciones que rigen el juicio de garantías."

"Respecto del artículo 1176² del mismo ordenamiento legal, dispone que la retención de bienes se registrará en lo que resulte aplicable, por lo dispuesto para los juicios ejecutivos mercantiles, sin embargo, tal ordenamiento hace referencia a la garantía prevista en el artículo 1179, que es la que pueda exhibir en su caso la parte contraria de la promovente de las providencias precautorias para así liberar la retención de bienes decretada, aunado que el mismo Código de Comercio expresamente requiere como requisito la exhibición de esta.

"Por otro lado, el numeral 1054 del código en cita³, establece que los juicios mercantiles se registrarán por las disposiciones

² "Artículo 1176. La retención de bienes decretada como providencia precautoria se registrará, en lo que le resulte aplicable, por lo dispuesto para los juicios ejecutivos mercantiles. La consignación y el otorgamiento de las garantías a que se refiere el artículo 1179 de este Código, se hará de acuerdo a lo que disponga la ley procesal de la entidad federativa a que pertenezca el juez que haya decretado la providencia, y en su oscuridad o insuficiencia conforme a los principios generales del derecho."

³ "Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se registrarán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva."

ahí previstas, y en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimiento local respectiva.

"En ese sentido, la supletoriedad tiene como finalidad colmar las lagunas legislativas sin llegar al extremo de implementar derechos o instituciones no regulados en la ley que ha de suplirse; lo que no ocurre en el caso, pues el legislador dispuso que la garantía es un requisito de las providencias precautorias, sin establecer excepciones para su otorgamiento.

"Ahora, la quejosa precisa que la autoridad responsable no considero lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 4^o⁴, sin embargo si bien este precepto legal es de aplicación supletoria al

⁴ "Artículo 4. Las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, tendrán dentro del procedimiento judicial, en cualquier forma en que intervengan, la misma situación que otra parte cualquiera; pero nunca podrá dictarse, en su contra, mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que este Código exija de las partes."

Las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones.

(F. DE E., D.O.F. 13 DE MARZO DE 1943)

La intervención que, en diversos casos, ordena la ley que se dé al Ministerio Público, no tendrá lugar cuando, en el procedimiento, intervenga ya el Procurador General de la República o uno de sus Agentes, con cualquier carácter o representación"



R.C.-6/2019.

000081

33

Código de Comercio, lo cierto es que del mismo dispone que las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, estarán exentos de prestar las garantías que este Código exija de las partes, por lo tanto no puede aplicarse al caso en concreto pues la quejosa es una institución bancaria, pero no cumple con el supuesto de pertenecer a la Administración Pública de la Federación.

"Entonces, es claro que ni la legislación aplicable en materia de providencias precautorias, ni la ley supletoria, prevén un trato diferenciado a las instituciones bancarias en relación a la obligación de prestar garantía.

"Las razones expresadas permiten concluir que la autoridad responsable fundó correctamente su decisión con base en la legislación aplicable en materia de providencias precautorias, y por ello no le asiste la razón a la parte quejosa cuando alega que el acto reclamado contiene una indebida fundamentación y motivación.

"Por otra parte, la quejosa alega que la autoridad responsable para robustecer sus argumentos invocó un criterio que no puede ser considerado ya que no es jurisprudencia y no tiene observancia obligatoria.

"Al efecto, el artículo 217 de la Ley de la Materia⁵, dispone que la jurisprudencia emitida por el pleno del máximo tribunal es de observancia obligatoria para los tribunales judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México.

"En el caso, la jurisprudencia que invocó el juez responsable tanto en el proveído de seis de septiembre pasado así como en la interlocutoria de veintiuno, siguiente, es del rubro y texto siguiente:

"INSTITUCIONES DE CREDITO. SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A OTORGAR GARANTIA O CONTRAGARANTIA EN MATERIA DE SUSPENSION, TRATANDOSE DE AMPARO DIRECTO.- El artículo 173 de

⁵ **"Artículo 217.** La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decreta el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales."



R.C.-6/2019.

35

la Ley de Amparo, establece que debe otorgarse fianza para que surta efectos la suspensión concedida o, en su caso, contrafianza para nulificar la medida cautelar y esta exigencia emana de la aplicación de un precepto constitucional como lo es el artículo 107, fracción X, de la Carta Magna; por tanto, es evidente que no obstante que el artículo 6o. de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito exime a las instituciones de crédito de constituir depósito o fianza legales, tales instituciones se encuentran obligadas a otorgar fianza para obtener la suspensión de sentencias definitivas que se reclamen en amparo directo y, en su caso, contragarantía para dejar sin efecto la medida suspensiva, porque partiendo de un principio de hermenéutica jurídica, no puede aceptarse que los preceptos relativos de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, queden subordinados a una disposición también contenida en otra ley reglamentaria que se encuentra en contradicción con la Ley de Amparo, pues

los mandatos de ésta, en relación con los preceptos constitucionales, son los que deben regir la interpretación y aplicación de cualquier otra ley en cuanto al juicio constitucional, para no hacer nugatorias las disposiciones del citado juicio de garantías."

"Cuyos datos de localización son: "Jurisprudencia (común), Materia(s): Común, número de registro 394275, tesis 319, Octava Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: apéndice de 1995, Tomo VI, Pagina: 214"

"De dichos datos de identificación, se advierte que el criterio invocado por el Juez primigenio para robustecer sus argumentos respecto a la fijación de una garantía por los posibles daños y perjuicios que se puedan ocasionar por la admisión de la providencia precautoria es de observancia obligatoria y no, una tesis como lo refiere la quejosa en su demanda de amparo, de ahí lo infundado de su concepto de violación.

"En ese sentido, tomando las consideraciones expuestas y ante lo infundado de los conceptos de violación, lo



R.C.-6/2019.

37

procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada por el quejoso."

IV.- La recurrente quejosa [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] por conducto de [REDACTED] por propio derecho, expresó como agravios, los siguientes:

"ÚNICO.- La postura del juzgador de amparo quien niega la protección de la justicia federal a mi representada al considerar que los documentos exhibidos en la solicitud de providencias precautorias (origen del acto reclamado) no satisface los requisitos establecidos por los artículos 1168 y 1175 del Código de Comercio, ya que uno de los requisitos a satisfacer al solicitar una providencia precautoria, consiste en garantizar los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida al deudor, en caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto o bien porque promovida sea absuelto.

"Fuente del Agravio: La Sentencia Definitiva de fecha 15 de noviembre de 2018, en su quinto considerando.

"Es violatoria de derechos humanos y de las garantías constitucionales, la sentencia definitiva de fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho, por virtud de que fue resuelta en contravención al principio de legalidad, seguridad jurídica, estricto derecho y acceso a la justicia, protegidas por nuestra Carta Magna, así como por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, violándose en perjuicio de mi representada los artículos 1º, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 8, 9, 25 y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

"Desde este momento, cabe destacar a este Órgano Revisor de amparo resulta ilegal la resolución que se impugna en el presente recurso ya que fue dictada por el juzgador de



R.C.-6/2019.

39

amparo en contravención a los principios de legalidad, estricto derecho, debido proceso y certeza jurídica toda vez que considera que no fueron satisfechos los requisitos de los artículos 1168 y 1175 del Código de Comercio tratándose de la retención de bienes solicitada ante la autoridad responsable, ya que la Ley de Instituciones de Crédito no forma parte de la supletoriedad de ser aplicado como excepción a la regla general que establece el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio.

"Es de hacer hincapié a este Órgano revisor, que el Juez Cuarto de Distrito de esta ciudad omite entrar al estudio del artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente, de **aplicación supletoria** a la legislación mercantil, ya que dicho precepto establece:

"Artículo 86.- *Mientras los integrantes del Sistema Bancario Mexicano, no se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligados a constituir depósitos o fianzas legales, ni aun tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos."*

"Del estudio del precepto transcrito, se consideran a los integrantes del Sistema

Bancario Mexicano como de acreditada solvencia y estos, no están obligados a constituir depósitos o fianzas legales; y toda vez que mi poderdante forma parte del Sistema Bancario Mexicano, esta queda exenta de la garantía impuesta por la autoridad responsable.

"Lo anterior es así, ya que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1063 del Código de Comercio, el cual a la letra dice:

"Artículo 1063.- Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme este Código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por el Código Federal de Procedimientos Civiles y en último término por el Código de Procedimientos Civiles local."

"En atención a lo anterior, el mismo Código de Comercio establece la posibilidad de la aplicación supletoria de las leyes, con la finalidad de substanciar todo tipo de procedimientos en materia mercantil, en el caso en concreto, es aplicable la Ley de Instituciones de Crédito, al ser una ley especial en materia de comercio.

"Ante tales argumentos, se considera conveniente señalar como apoyo la siguiente jurisprudencia:



R.C.-6/2019.

41

Época: Décima Época, Registro: 2003161, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Materia(s) Constitucional, Tesis: 2a./J. 34/2013 (10a.), Página: 1065.

SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.-

La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que:

- a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a

cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate." (Cita precedentes)

"La anterior jurisprudencia transcrita determinó que los requisitos necesarios para que opere la supletoriedad de una norma respecto de otra son:

- "Que el ordenamiento que pretenda suplirse lo admita expresamente y señale la ley aplicable.
- "Que la ley a suplirse contenga la institución jurídica de que se trata.
- "Que no obstante la existencia de ésta las normas reguladoras en dicho ordenamiento sean insuficientes para su aplicación al caso concreto, por falta total o parcial de la reglamentación necesaria.
- "Que las disposiciones con las que vaya a colmarse la deficiencia no contraríen las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida.

"Al respecto, se considera que al acto reclamado le resulta aplicable supletoriamente lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de



R.C.-6/2019.

43

Instituciones de Crédito, pues se cumplen los requisitos enunciados en el párrafo precedente, ya que el artículo 1063 del Código de Comercio, prevé la aplicación supletoria en primer término, de las leyes especiales en materia de comercio, como lo es la Ley de Instituciones de Crédito; en segundo término, el Código Federal de Procedimientos Civiles, así como del cuerpo adjetivo de la entidad en que se tramita el juicio en el caso, el Código de Procedimientos Civiles para el distrito Federal, en ese orden.

"El segundo de los requisitos en cuestión, relativo a que la ley a suplirse contenga la institución jurídica de que se trata, su señoría deberá considerarla reunida, toda vez que el ordenamiento de la materia prevé de manera el género de la institución jurídica en estudio, esto es, la acreditada solvencia de mi representada por formar parte del Sistema Bancario Mexicano y por no encontrarse en quiebra o liquidación.

"En cuanto al tercero de los elementos en estudio, referente a que, no obstante la existencia de la regulación de la figura las normas reguladoras en dicho ordenamiento sean insuficientes para su aplicación al caso en concreto, por falta total o parcial de la

reglamentación necesaria, igualmente debe considerarse acreditado, ya que en el Código de Comercio no se establece con claridad que las instituciones Bancarias con acreditada solvencia quedan exentas de la constitución de garantías por daños y perjuicios a terceros.

"Finalmente, en cuanto al último de los requisitos, consistente en que las disposiciones con las que vaya a colmarse la deficiencia contraríen las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida, se considera que se encuentra plenamente acreditado, debido a que la Ley de Instituciones de Crédito aplica su supletoriedad de manera directa sin que se contraríen las disposiciones legales para ello.

"A mayor abundamiento, es menester resaltar que en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia precitada, nuestro máximo tribunal puntualizó que aun en ausencia de regulación de una institución procesal, acorde a lo dispuesto por el artículo 14 de nuestra Carta Magna, los juzgadores están autorizados para acudir a los "principios generales del derecho" para resolver toda clase de controversias del orden civil y el numeral 17 del mismo ordenamiento legal prevé el derecho que toda persona tiene para que se le



R.C.-6/2019.

45

administre justicia por tribunales y que esta sea pronta y expedita.

"Por tanto, queda claro que el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito cobra relevancia ya que el legislador indicó que mi representada al ser integrante del sistema Financiero Mexicano y al no estar en quiebra o liquidación, esta queda exenta de constituir o se le imponga constituir fianza y/o garantías legales.

"En ese orden de ideas, lo que precede revela que la autoridad responsable ordenadora manifiesta en su fallo de quince de noviembre de dos mil dieciocho, es contrario a ley y a los principios de LEGALIDAD y Estricto Derecho ya que como quedó ilustrado, el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito de aplicación supletoria encuadra en la hipótesis argumentada en el presente escrito de garantías, empero la autoridad ordenadora violenta los derechos humanos de mi mandante al fijar una garantía y/o fianza sin tomar en consideración el multicitado artículo de la ley supletoria, motivo por el cual, Órgano Revisor de amparo deberá otorgar la protección constitucional a mi representada.

"Sirviendo de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios:

Época: Décima Época, Registro: 2003161, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 34/2013 (10a.), Página: 1065.

"SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES.

REQUISITOS PARA QUE OPERE.- La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que:

a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a



R.C.-6/2019.

47

cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate." (Cita precedentes)

Época: Novena Época, Registro: 174859, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, Materia(s): Civil, Tesis: I.6o.C. J/50, Página: 1045.

"PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL.-

En los juicios mercantiles opera con mayor rigor el principio dispositivo de estricto derecho que en las controversias de carácter meramente civil, lo que significa que a los contendientes, ante una actitud u omisión del órgano jurisdiccional que les perjudique, les compete actuar, promover y gestionar con más atención y cuidado, en el momento procesal oportuno, que sus pruebas sean admitidas y desahogadas, buscando con ello, que sus peticiones se satisfagan para inclinar el ánimo del juzgador y

así lograr posiciones favorables ante la parte contraria." (Cita precedentes)

Época: Décima Época, Registro: 2003615,
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito,
Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 2,
Materia(s): Común, Tesis: I.5o.C. J/1 (10a.),
Página: 1305.

**"JUICIO DE AMPARO. ES UN MEDIO PARA
EL CONTROL DE LA LEGALIDAD,
CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD DE LOS ACTOS DE
AUTORIDAD.-** Conforme a los artículos 1o.,
103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, reformados
mediante decretos publicados en el Diario
Oficial de la Federación de 10 y 6 de junio de
2011, respectivamente, el juicio de amparo es
un medio de control que sirve para que los
órganos competentes verifiquen el respeto que
las autoridades del Estado deben a las normas
generales ordinarias que regulan su actuación
(control de legalidad), a la Ley Fundamental
(control de constitucionalidad) y a los tratados
o convenciones internacionales (control de
convencionalidad). Esto es, el juicio protector
de los derechos fundamentales de los



gobernados, conocido como juicio de amparo, tiene como parámetro de control esos tres tipos de normas jurídicas, y su objeto (de control) son los actos de autoridad -lato sensu-. Tal medio de defensa debe tramitarse y resolverse conforme a lo que establecen los referidos artículos 103 y 107 constitucionales (y su ley reglamentaria), favoreciendo, desde luego, los principios interpretativos de los derechos humanos contenidos en el propio artículo 1o. constitucional. De esta manera, todos los órganos del Estado Mexicano, en el ámbito de sus competencias, al resolver los problemas en los que se involucren los derechos humanos, deben atender, en principio, a los que consagra la Carta Magna, como también a los contenidos en los tratados o convenciones internacionales suscritos en esa materia y, desde luego, al cumplimiento del control de legalidad que no debe apartarse de los principios precisados." (Cita precedentes.)

V. Estudio.

Aplicación del artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito.

La parte quejosa aduce de manera sustancial en sus agravios, que la sentencia impugnada se dictó en contravención al principio de legalidad, seguridad jurídica, estricto derecho y acceso a la justicia, ya que consideró que no fueron satisfechos los requisitos de los artículos 1168 y 1175 del Código de Comercio tratándose de la retención de bienes solicitada ante la autoridad responsable, debido a que la Ley de Instituciones de Crédito no forma parte de la supletoriedad.

Afirma que el Juez de Distrito omitió entrar al estudio del artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, de aplicación supletoria a la legislación mercantil, pues en tal numeral se considera a los integrantes del Sistema Bancario Mexicano como de acreditada solvencia, por lo que no están obligados a constituir depósitos o fianzas legales, y en ese sentido omitió considerar que la quejosa forma parte del Sistema Bancario Mexicano y por ello está exenta de la garantía impuesta por la autoridad responsable.



R.C.-6/2019.

51

Afirma que lo anterior es así, pues el mismo Código de Comercio en su artículo 1063, establece la posibilidad de la aplicación supletoria de las leyes con la finalidad de sustanciar todo tipo de procedimientos en materia mercantil, por lo que en el caso concreto es aplicable la Ley de Instituciones de Crédito, al ser una ley especial en materia de comercio. En apoyo a su argumento cita la tesis del rubro "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.", pues aduce que en ese criterio se establecen los requisitos para que opere la supletoriedad de una norma respecto de otra, los cuales son: que el ordenamiento que pretenda suplirse lo admita expresamente y señale la ley aplicable; que la ley a suplirse contenga la institución jurídica de que se trata; que no obstante la existencia de ésta, las normas reguladoras en dicho ordenamiento sean insuficientes para su aplicación al caso concreto por falta total o parcial de la reglamentación necesaria; y que las disposiciones con las que vaya a colmarse la deficiencia no contraríen las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida.

Manifiesta que al acto reclamado le resulta aplicable supletoriamente lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, al cumplirse los requisitos señalados en el párrafo anterior, ya que el artículo 1063 del Código de Comercio prevé la aplicación supletoria en primer término de las leyes especiales en materia de comercio, como es la Ley de Instituciones de Crédito; asimismo, porque el ordenamiento de la materia prevé el género de la institución jurídica en estudio, esto es, la acreditada solvencia de la recurrente por formar parte del Sistema Bancario Mexicano y no encontrarse en quiebra o liquidación; de igual modo, porque el Código de Comercio no establece con claridad que las instituciones bancarias con acreditada solvencia quedan exentas de la constitución de garantías por daños y perjuicios a terceros; y porque la Ley de Instituciones de Crédito aplica su supletoriedad de manera directa sin que se contraríen las disposiciones legales para ello.

Añade que incluso el Máximo Tribunal del País puntualizó que aun en ausencia de regulación de una institución procesal, acorde a lo dispuesto en el artículo



R.C.-6/2019.

53

14 constitucional, los juzgadores están autorizados para acudir a los “principios generales del derecho” para resolver toda clase de controversias del orden civil, y el artículo 17 constitucional prevé el derecho de toda persona a que se le administre justicia pronta y expedita.

Que por lo anterior, el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, encuadra en la hipótesis de aplicación supletoria.

Cita en apoyo a sus argumentos, las tesis de los rubros: “SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.”; “PRINCIPIO DE ECTRICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL.”, y “JUICIO DE AMPARO. ES UN MEDIO PARA EL CONTROL DE LA LEGALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD.”

Son **infundados** los anteriores argumentos.

Es así, pues la Ley de Instituciones de Crédito **no es aplicable** supletoriamente al Código de Comercio -en lo relativo a las providencias precautorias- para determinar que no se deba exigir a la institución bancaria quejosa, hoy recurrente, la carga de exhibir la garantía a que se refiere la fracción V del artículo 1075 del Código de Comercio.

En efecto, conforme al Código que regula la materia del procedimiento de origen, esto es, el Código de Comercio, en los casos en que resulte procedente decretar una providencia precautoria por actualizarse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 1168 de ese numeral, la parte que lo solicite debe cumplir, necesariamente, con el requisito de eficacia a que se refiere la fracción V del artículo 1175 del citado ordenamiento que a la letra dice:

“Artículo 1,175. El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos:

(...)

“V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en



R.C.-6/2019.

55

el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte.

El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante.

Como puede advertirse de la porción normativa transcrita, existe disposición expresa en el sentido de que la procedencia de las providencias precautorias queda condicionada a que se cumpla el requisito indispensable, consistente en que la parte que lo solicite garantice los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la medida al deudor en cualquiera de los supuestos previstos en la propia ley.

Esa norma regula de manera específica los requisitos que habrá de cumplir la parte que solicite la medida precautoria, la cual no prevé ninguna excepción atendiendo a la calidad de la parte que la solicita ni a ninguna otra circunstancia.

Lo anterior lleva a establecer que, con independencia de la acreditada solvencia con que cuenta la institución bancaria quejosa, tratándose del procedimiento de solicitud de medidas precautorias, el solicitante está obligado, en todos los casos, a garantizar los daños y perjuicios a que se refiere el numeral en estudio.

Sin que constituya obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que la Ley de Instituciones de Crédito forma parte del sistema jurídico general en materia mercantil, pues no por ello, la institución bancaria recurrente está exenta de exhibir la garantía solicitada por el juez responsable, ya que para tal caso no se actualiza la supletoriedad de la Ley de Instituciones de Crédito al Código de Comercio, pues como se dijo, éste contiene regulación expresa en cuanto a los requisitos exigidos para el otorgamiento de las providencias precautorias, y por su parte, el numeral invocado de la Ley de Instituciones de Crédito no tiene como finalidad establecer la exención a un requisito para los procedimientos judiciales en materia mercantil.



R.C.-6/2019.

57

Resulta conveniente citar el contenido íntegro de los artículos 1° y 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, que en su orden establecen:

“Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito; la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar; su sano y equilibrado desarrollo; la protección de los intereses del público; y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano.”

“Artículo 86.- Mientras los integrantes del Sistema Bancario Mexicano, no se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligados a constituir depósitos o fianzas legales, ni aun tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos.”

Conforme al primero de esos numerales, la Ley de Instituciones de Crédito fue creada para regular el sistema bancario en México en todo lo concerniente a la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, así como su sano y equilibrado desarrollo.

Sin embargo, ello es independiente de las reglas procesales que rigen los juicios y procedimientos mercantiles en los que un banco sea parte, y no permea en las relaciones que, a nivel de particular tiene el banco con las personas físicas o morales con quienes tenga tratos comerciales.

En ese sentido, la regla general establecida en el artículo 86 en estudio, que otorga a las instituciones bancarias que no estén en liquidación o en procedimiento de quiebra, la presunción de que tienen acreditada solvencia y que por ello no estarán obligadas a constituir depósitos o fianzas legales, no es aplicable al caso en estudio, al no estar inmersa en la ley especial que regula los procedimientos mercantiles, como es el Código de Comercio, en el que se impone como requisito de efectividad a quien solicite una providencia precautoria, que exhiba necesariamente una garantía. Por tanto, la citada regla general no aplica al caso concreto por no pertenecer al sistema normativo que regula la procedencia y requisitos para el otorgamiento de las providencias precautorias, sin que proceda su



R.C.-6/2019.

59

aplicación supletoria debido a que en cuanto al requisito en mención, la legislación mercantil que regula el procedimiento de providencias precautorias, contiene la regulación completa en cuanto a los requisitos para el otorgamiento de esas medidas.

Asimismo es inaplicable al caso, porque las normas especiales, como en el caso lo es el artículo 1175 fracción V del Código de Comercio, excluyen la aplicación de las normas generales, como lo es el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito; de lo que se sigue que tratándose de **normas procesales**, se debe estar a lo que expresamente dispongan las primeras al momento de regular la procedencia de los juicios o procedimientos de que se trate.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis⁶ cuyo criterio se comparte y es del siguiente tenor literal:

“SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA BANCARIO

⁶ Tesis: I.130.A.16 K, Registro: 186108, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época, página: 1391.

MEXICANO DEBEN CONSTITUIR GARANTÍA PARA OBTENERLA. El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el juicio de amparo se sujetará a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley. Lo anterior implica que todas las reglas que rigen al juicio de garantías deben estar contenidas en un solo ordenamiento pues, de lo contrario, se llegaría al extremo de que cada ley pudiera establecer la forma en que su propio contenido y los actos de ella derivados se deben someter al control de constitucionalidad que representa el juicio de amparo. Por tanto, si bien es cierto que el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito señala que los integrantes del Sistema Bancario Mexicano no están obligados a constituir garantía para obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo, dada su acreditada solvencia económica, también lo es que dicho precepto, por estar previsto en una ley diversa a la Ley de Amparo, no es susceptible de constituir una excepción a la regla general contenida en el artículo 5 de dicho ordenamiento, el cual establece que siempre que puedan ocasionarse daños y perjuicios a terceros, el quejoso deberá constituir garantía para obtener la suspensión del acto reclamado”.



R.C.-6/2019.

61

Asimismo, cobra aplicación, por analogía, la tesis⁷ que se comparte y es del texto siguiente:

“SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO. NO ESTÁN EXENTAS DE PRESENTAR EN LA DILIGENCIA DE REMATE EL BILLETE DE DEPÓSITO POR EL IMPORTE DEL DIEZ POR CIENTO DE SU PUJA. Las sociedades nacionales de crédito están obligadas a exhibir ante la Junta, en el momento del desahogo de la diligencia de remate, su postura por escrito, así como el billete de depósito de Nacional Financiera que ampare el diez por ciento de su puja, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 970 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que dicho numeral no exceptúa del cumplimiento de sus extremos a persona alguna, ni física ni moral, sin ser obstáculo para la satisfacción del precepto citado el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece que mientras los integrantes del sistema bancario mexicano no se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligados a constituir depósitos o fianzas legales, en virtud de que para ser tomada en cuenta esta

⁷ Tesis: IV.3o.52 L, Registro: 197645, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, Novena Época, página: 798.

disposición se requiere que no haya precepto expreso en la ley de la materia aplicable al caso, de conformidad con el artículo 17 de la citada ley laboral, independientemente de que la exigencia de otorgar garantía dentro de la audiencia de remate, emana de la legislación laboral, la cual es reglamentaria del artículo 123 constitucional y, por ende, no pueden subordinarse los preceptos de la ley laboral a un ordenamiento diverso.”

Igual criterio se sostuvo en el recurso de revisión número R.C. 374/2018, resuelto por este Tribunal Colegiado mediante ejecutoria de siete de diciembre de dos mil dieciocho.

Por tanto, no resultan aplicables en beneficio de los intereses de la recurrente, las tesis que citó, de los rubros “SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.”; “PRINCIPIO DE ECTRICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL.”, y “JUICIO DE AMPARO. ES UN MEDIO PARA EL CONTROL DE LA LEGALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE LOS ACTOS DE



R.C.-6/2019.

63

AUTORIDAD.”, en mérito a que por las razones expuestas en esta ejecutoria, el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito no es aplicable supletoriamente al Código de Comercio, conforme a las disposiciones estrictas contenidas en la legislación mercantil, motivo por el cual, no procedía conceder el amparo a la quejosa al no demostrarse que la resolución reclamada fuese ilegal.

En los términos relatados, al ser infundados los agravios que expresa la parte recurrente, y al no estar en alguna de las hipótesis que amerite suplir la queja deficiente en términos de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, procede confirmar la resolución impugnada.

Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 92 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.- Se confirma la sentencia recurrida.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos al Juzgado de Distrito que los

envió y, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido.

Así, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Alejandro Villagómez Gordillo, Luz Delfina Abitia Gutiérrez y Jaime Aurelio Serret Álvarez, cuyas firmas aparecen a continuación, al igual que la del Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, hasta hoy **seis de marzo de dos mil diecinueve**, en que se realizó el engrose de esta resolución.- Doy fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE Y PONENTE:

ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO.

MAGISTRADA:

LIC. LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ.

MAGISTRADO:

LIC. JAIME AURELIO SERRET ÁLVAREZ.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS:

LIC. SERGIO MOLINA CASTELLANOS.

Esta foja número **sesenta y cuatro**, pertenece a la parte final de la resolución dictada en el R.C.-6/2019. Ciudad de México, a **seis de marzo de dos mil diecinueve**. Conste.

Responsables de la supresión de datos
Lic. Nélida Calvillo Mancilla.
Oficial: Martha Esther Flores Fierros.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL SEGUNDO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO:

MADE 06 MAR 2019
QUE CON FECHA 06 MAR 2019 SE NEGOCIÓ DEL
ENGROSE EL PRESENTE ASUNTO.- CONSTE.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

07 MAR 2019

se notifica a

[Firma]

la resolución

que antecede por medio de la cual se desvirtúa de los artículos 35, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, entre los que se han

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

[Firma]
JUNCO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL DISTRITO FEDERAL

PROF. CECILIA ESTRADA HERNANDEZ

08 MAR 2019

en

refiere la razón que antecede parte de los efectos legales conforme a la fracción III del artículo 29 de la Ley de Amparo reforma. Doy fe. -

SECRETARÍA DE JUSTICIA

[Firma]
PROF. CECILIA ESTRADA HERNANDEZ

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



4 000194 33002

SEGUNDO TRIMESTRE
EN LA
PR



Secuencia: 3152871

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

[illegible]